**Aplicación de la justicia restaurativa en el Sistema de Responsabilidad
Penal de Adolescentes en Colombia**

Yenni Liliana Quintero Estupiñán

Universidad Santo Tomás

Maestría en Derechos Humanos

2018

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
CAPITULO I – BASES TEÓRICAS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA....	7
1.1. Justicia Restaurativa, como alternativa a la justicia retributiva	7
1.2. Orígenes de la justicia restaurativa:	10
1.3. Prácticas restaurativas.....	11
1.3. Programas de Justicia Restaurativa:	14
1.4. Principios de los programas de Justicia Restaurativa	16
1.5. Actores según la Justicia Restaurativa	17
1.5.1. Víctimas del delito	18
1.5.2. La comunidad	20
1.5.2. Los Ofensores	21
1.6. La prevención del delito.....	22
1.7. Apuntes finales sobre la justicia restaurativa:	25
CAPITULO II – APLICACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN	
COLOMBIA.....	26
2. 1. El Código de Infancia y Adolescencia.....	26

2.2. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.....	28
2.2.1. Justicia restaurativa en el SRPA.....	29
2.2.2. Enfoque restaurativo en el SRPA.....	30
2.3. Actores del SRPA	35
2.3.1. Policía Nacional:.....	35
2.3.2. Consejo Superior de la Judicatura.....	36
2.3.3. Defensoría Del Pueblo	37
2.3.4. Procuraduría General de la Nación - Ministerio Público.....	38
2.3.5. Defensorías de Familia.....	38
2.3.6. Comisarías de familia.....	39
2.3.7. Equipo Técnico del ICBF.....	40
2.4. Adolescentes que han cometido un ilícito	42
2.5. Las víctimas en el SRPA	43
2.6. La comunidad y el concepto de corresponsabilidad	45
CAPÍTULO III – RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRINCIPIO DE	
JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SRPA.....	48
3. 1. Ventajas y retos de la superación de la concepción del castigo como	
consecuencia de la infracción	49

3. 2. La falta de delimitación de delitos en los cuales es aplicable el principio de justicia restaurativa	53
3. 2. 1. Sobre la aplicación del Principio de Oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños.....	53
3. 3. Articulación de actores e instituciones en torno al principio de Justicia restaurativa y problemas operativos en la aplicación de las prácticas restaurativas.....	55
3. 4. Falta de políticas sociales destinadas a la prevención de la delincuencia	58
3. 5. El problemático concepto de comunidad.....	60
CONCLUSIONES.....	63
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	67

INTRODUCCIÓN

Pensar la justicia en una dimensión restaurativa significa comprender el delito como un conflicto humano que requiere ser superado, no mediante el castigo, sino mediante una sanción constructiva. La aplicación de este tipo de justicia, al constituir un cambio en la forma en la que se concibe tradicionalmente la justicia, no es un asunto sencillo. Requiere, por el contrario, del esfuerzo mancomunado de toda la sociedad, en aras de que existan al menos tres cambios. Primero, un vuelco a la preconcepción de que delito y castigo deben sostener una relación causal. Segundo, se le debe dar a las víctimas y a la comunidad agencia en los procesos judiciales (llámeseles mediación, conciliación o audiencia), bajo el entendido de que ambas partes han resultado también dañadas por el delito y que tienen, por ello, la responsabilidad y el beneficio de tomar parte en éstos, en función, no solo de incidir en decisiones respectivas a las sanciones, sino también a las diferentes acciones por las que puede optar un (a) ofensor (a) para resarcir su culpa. Y por último, acoger la idea de que toda la sociedad, incluyendo al Estado, las instituciones, los medios de comunicación, la escuelas, la población civil, entre otros actores, podemos propender -en diferentes grados- por tener una sociedad más justa y en donde, en consecuencia, los delitos se reduzcan.

Como es fácil deducir, estos tres cambios atañen a cuestiones arraigadas en la cultura y en la institucionalidad y es comprensible que no se den sino paulatinamente. Bajo esta perspectiva, este documento pretende estudiar cómo el Estado y, principalmente, el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (en adelante SRPA), han intentado

instalar el modelo de Justicia restaurativa en sus lineamientos, en sus actores y en sus prácticas.

Para ello, se revisará, en el primer capítulo, bibliografía que aborda desde distintas aristas este concepto y que señala a su vez sus características y su origen, para continuar con una revisión de tres conceptos relacionados como el de “prácticas restaurativas”, “programas de justicia restaurativa” y “principios para la implementación de programas de justicia restaurativa”. Además, definirá cómo debe ser la participación, en este modelo de justicia, de las víctimas, los (as) ofensores (as) y la comunidad, según sus necesidades y responsabilidades. Para terminar con algunos de los directrices establecidas por la RIAD para la prevención de la delincuencia.

El segundo capítulo de este documento se centrará en explicar cómo funciona el SRPA y cómo hace éste para cumplir con su finalidad restaurativa, a través de sus actores, de sus enfoques y de medios como el principio de oportunidad, la mediación y la conciliación.

El tercer capítulo hace un resumen de algunos de los hallazgos de informes de monitoreo o seguimiento al SRPA, respectivos a la aplicación o no de la justicia restaurativa en este sistema.

Como se puede observar, este documento es el producto de una revisión bibliográfica de diversos tipos de fuentes. Esto lo enmarca dentro de un tipo de investigación dogmática-teórica, pues además de examinar normas del ordenamiento

jurídico, las contrasta o relaciona con fuentes bibliográficas diversas, dentro de éstas: tesis de grado, informes, instrumentos internacionales, artículos, entre otras.

CAPITULO I – BASES TEÓRICAS DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA

Este capítulo busca precisar cuales son las características fundamentales de la justicia restaurativa a través de algunas de las definiciones que de ella han hecho autores como: Diana Britto, Rodrigo Uprimny, Ted Watchell y Howard Zehr, entre otros estudiosos del tema. Posteriormente hablará sobre su origen y sobre las tensiones que existen entre este concepto y el de justicia retributiva. Adicionalmente, nos adentraremos en conceptos relacionados con la justicia restaurativa como lo son: las prácticas restaurativas, los programas de justicia restaurativa y sus principios, para terminar con una corta ilustración de las características y las funciones de tres actores fundamentales para este tipo de justicia que son: las víctimas, los (as) ofensores (as) y la comunidad.

1.1. Justicia Restaurativa, como alternativa a la justicia retributiva

Antes de definir la justicia restaurativa, es importante hacer hincapié en su *alter ego*, que sería en este caso, la justicia retributiva. Como lo afirma Diana Britto (2010), el modelo de justicia que se aplica en la mayoría de las sociedades modernas es la denominada Justicia Retributiva, “es decir, la justicia que establece una relación entre el infractor y la sociedad a través de los organismos del Estado que imponen una sanción, con la cual se espera que el victimario cambie su comportamiento a partir de la experiencia de reclusión” (p. 18). Esta autora afirma también que “este modelo de justicia emerge y se consolida con el modelo capitalista, que tiene un especial interés en la protección de la propiedad privada”

(Britto, 2010, p. 18), pero que, al no brindar soluciones en torno a la prevención del delito, sus resultados no son del todo satisfactorios.

Como respuesta a este problema, algunos sistemas de administración de justicia han acogido un modelo presente sobre todo en sociedades ancestrales que se basa en la Justicia Restaurativa, la cual plantea, a grandes rasgos que, al ocurrir los delitos en el seno de una comunidad, contra miembros de esta comunidad, la resolución de este conflicto, también deberá tener lugar en ella. Este procedimiento, afirma la autora, permite que el resultado sea más eficaz, por cuanto hay una sensibilización en “el infractor del dolor y los alcances de sus actos y ante tal sensibilización es muy probable que no reincida en los hechos y que además restablezca los vínculos con la comunidad” (Bitto, 2010, p. 19).

La justicia restaurativa (o JR) propone una forma más humanizada de hacer justicia, enfatizando en la mediación y negociación de los conflictos entre las personas. En este sentido, la JR incluye la participación activa de la víctima, del agresor y de la sociedad, y reconoce a la víctima como un sujeto activo dentro del proceso penal, la conciliación y la reparación de los daños (Saffón & Uprimmy, 2005; Shuch, 2008, citado en ICBF, 2017). De esta manera, la justicia restaurativa tiene un nuevo enfoque: el del reconocimiento de la víctimas, a quienes siempre se ha pasado por alto, reconociendo que es a ellas a quienes se les han vulnerando sus derechos, los que se hace necesario restablecer y fortalecer.

Además de proponer un tratamiento diferente a las víctimas, la JR también constituye una nueva manera de ver el delito. Si bien en la justicia retributiva se ve el delito desde la óptica del infractor y del bien jurídico tutelado, la JR ve el delito como una ruptura

en la que, si bien hay una víctima afectada, hay también unas razones de fondo, de parte del infractor y una afectación en la comunidad de la que éstos hacen parte. Es por esta razón que la JR se centra en las necesidades de las víctimas, de los ofensores y de la comunidad, la cual sufrió una ruptura en sus relaciones en la que se quebrantó el orden y la armonía, por lo que se convierte en fundamental restablecer a cada una de las partes afectadas. Pensar la justicia en una dimensión restaurativa significa reconocer a las víctimas como protagonistas del delito, el cual, sin dejar de considerarse como una conducta que pone en peligro o vulnera un bien tutelado por el Estado, se considera primordialmente como un conflicto humano que requiere ser superado, no mediante el castigo sino por la sanción constructiva.

El proceso mismo de interactuar, afirma Watchel (2013), “es fundamental para satisfacer las necesidades emocionales de las partes interesadas” (p. 4). Es por ello que un proceso restaurativo involucra la participación activa de todos los tres grupos de las principales partes interesadas. En este sentido, “el castigo retributivo del ofensor es visto como insuficiente para restablecer la convivencia social pacífica, pues no toma en cuenta los sufrimientos y las necesidades de la víctima, ni permite la adecuada reincorporación del delincuente a la comunidad” (Uprimny y Saffón, 2005, p. 7). En ese entender, afirman los autores:

El paradigma restaurador pretende centrarse en el futuro y no en el pasado y, al hacerlo, lejos de basarse en la evaluación de la culpa del ofensor, le otorga una importancia fundamental a la búsqueda de aquellos mecanismos a través de los

cuales éste puede adquirir conciencia acerca del daño que causó, reconocer su responsabilidad e intentar reparar ese daño (Uprimny y Saffón, 2005, p. 8).

1.2. Orígenes de la justicia restaurativa:

La aplicación de mecanismos de justicia restaurativa al proceso penal deviene de directrices del sistema universal de derechos humanos, especialmente a partir de la década del dos mil. Estos mecanismos buscan dar respuestas alternativas a la criminalidad, involucrando tanto a víctimas como a victimarios, a las instituciones estatales y a la comunidad. A través de ésta se espera promover “la superación pacífica de los conflictos (...) promover prácticas comunitarias responsables (...), así como el desarrollo de acuerdos en torno a un resultado deseado por las víctimas y los delincuentes” (Unidas, 2006, pág. 6, en Hadechini, 2016, p. 10).

La aparición de la Justicia Restaurativa en la normatividad jurídica de diferentes países, afirma Diana Britto, “está directamente relacionada con el avance de corrientes de pensamiento como la victimología, que llama la atención sobre el excesivo interés en el victimario y el sistemático olvido de la víctima” (Consedine, 2002, citado en Britto, 2002, p. 30). Sin embargo, sus orígenes pueden ser rastreados en culturas muy antiguas, sobre todo en culturas indígenas de Nueva Zelanda, Canadá, Australia y Norteamérica, para quienes la idea de lo comunitario prevalece sobre la de individuo. Además, una de las características comunes en la concepción de Justicia de estas comunidades es la comprensión de que el ofensor, en cuanto miembro de la comunidad, no debe ser excluido pues esto es perjudicial para la supervivencia y los intereses del grupo. “Así pues, el modo de resolver el delito es obligar al infractor a reparar el daño, mantenerlo dentro de la

comunidad y lograr una restauración de la relación con la víctima” (Consedine, 2002, citado en Britto, 2002, p. 30).

Como lo mencionan Uprinmy y Saffón, “la JR se enmarca dentro de un movimiento más amplio -y también relativamente reciente- de crítica al carácter represivo y retributivo del derecho penal, que se nutre de gran variedad de fuentes religiosas, culturales y éticas” (p. 7) y retoma las prácticas ancestrales, en tanto representan una alternativa a la justicia retributiva (Rodríguez, 2012), posiblemente más infructuosa en los casos de niños, niñas y adolescentes que, incluso, en el caso de adultos.

Otro de los episodios que abrió camino a este tipo de justicia, es un caso sucedido en Ontario Canadá, en el año 1974, en el que dos jóvenes acusados de actos vandálicos, en vez de ser castigados por el sistema judicial ordinario, fueron llevados a un encuentro entre víctimas y ofensores y se les pidió que hicieran un informe sobre las consecuencias de sus actos en las víctimas.

1.3. Prácticas restaurativas

Más allá de lo que se diga a cerca de la JR, sobre sus antecedentes y sobre las razones de su reciente auge, es importante aclarar que la Justicia Restaurativa es un objetivo, un ideal que ampara una serie de cambios estructurales y metodológicos por los que han optado algunos sistemas de administración de justicia, como es el caso del sistema que le corresponde al presente documento, que es el SRPA. Es por esta razón que, antes de continuar con las bases teóricas de la JR, es importante hacer hincapié en el concepto de Prácticas Restaurativas, ya que, pese a que no hay mucha bibliografía respectiva a este tema

particular, es el concepto con el que parece estar más cómodo el ICBF en sus lineamientos. Muy probablemente, la razón es ante todo pragmática y es que prometer justicia, en cualquiera de sus acepciones, no es un asunto sencillo y es por esto que el Lineamiento del ICBF, que es el que establece las pautas de la atención a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en Colombia, es bastante cauto a la hora de hablar sobre justicia restaurativa y prefiere hablar de prácticas tendientes a alcanzarla, definiéndolas así:

Las Prácticas Restaurativas representan el medio para alcanzar la Justicia Restaurativa a través de metodologías y procesos que permiten generar condiciones de dialogo y reparación, dinamizando la responsabilidad en el ofensor y mejorando la convivencia y las relaciones establecidas con las partes que se han visto afectadas por un delito o una falta, recuperándoles su seguridad y brindándoles una mayor sensación emocional de bienestar, permitiendo la consumación de acuerdos restauradores que van más allá de la realización de una acción o una actividad para el otro (ICBF, 2017, p. 73).

Además de lo anterior, el Lineamiento del ICBF (2017) cita a la Sentencia C-917, de 2006, de la Corte Constitucional, la cual afirma que las prácticas de justicia restaurativa pueden estar incluidas en “sistemas de justicia alternativa o complementaria de los sistemas de justicia ordinarios y buscan regenerar los vínculos sociales, psicológicos y relacionales de la víctima y el agresor con su comunidad mediante un proceso en el que participan todos los involucrados con miras a obtener un resultado restaurativo” (ICBF, 2017, p. 71). Según el documento del ICBF, estas prácticas “representan una manera diferente de entender la Justicia tradicional de carácter punitivo y juzgador” (ICBF, 2017, p. 74); y buscan resolver conflictos de forma conjunta entre los implicados, junto a la familia y la comunidad.

La idea sobre la cual se construyen las prácticas restaurativas “es que el ser humano tiene una mayor posibilidad de hacer cambios, de mostrar su potencial, de ser más cooperador y productivo en la medida que logra trabajar con y no contra o para la justicia, como se hace en la justicia tradicional que normalmente lleva a que se limite su capacidad de decisión y su actuación en el proceso” (ICBF, 2017, p. 74). En este sentido, la característica más relevante de este tipo de prácticas es que devuelven la agencia a quien delinque y a quien ha resultado víctima del hecho delictivo, dejando que ésta última sea quien decida cuál es el camino más idóneo para la resolución del conflicto. Así mismo, el rol de la comunidad es fundamental, pues entiende que ambos, víctima y victimario, forman parte de ella y que resolver el conflicto de manera adecuada trae beneficios también para su estructura.

Una práctica restaurativa podría ser la mediación, pero realizada ésta dentro de las directrices de la JR, es decir, con la actuación de todas las partes implicadas. Según el “Manual sobre programas de Justicia restaurativa”, es “más probable que el proceso de mediación alcance todos sus objetivos si las víctimas y los delincuentes se reúnen cara a cara, puedan expresar sus sentimientos directamente y desarrollen un nuevo entendimiento de la situación” (Naciones Unidas, 2006, p. 18). La mediación, puede catalogarse como una práctica restaurativa pues incluye la presencia de la víctima, el ofensor y un mediador.

Los resultados de estas prácticas restaurativas pueden incluir acciones “como la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del delincuente” (Naciones Unidas, 2016, p. 7).

1.3. Programas de Justicia Restaurativa:

Como se planteó antes, la justicia restaurativa surge de la insatisfacción y la frustración con el sistema de justicia formal y del interés de fortalecer las prácticas del derecho consuetudinario, más presente en las prácticas tradicionales de justicia. En este contexto, Naciones Unidas elaboró el Manual sobre programas de justicia restaurativa en el que plantea una serie de características para la elaboración de dichos programas, entre éstas se pueden resaltar:

Los programas de justicia restaurativa se basan en el principio fundamental de que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino también hiere a las víctimas y a la comunidad y que cualquier esfuerzo para solucionar las consecuencias del comportamiento delictivo deberá, en la medida de lo posible, involucrar tanto al ofensor como a las partes ofendidas, y proporcionar la ayuda y el apoyo que la víctima y el delincuente requieren (Naciones Unidas, 2006, p. 6).

Los programas de justicia restaurativa son acciones sistemáticas que desarrollan los Estados o las comunidades para buscar la justicia restaurativa. Éstos, al ser sistemáticos, deben tener sus objetivos y métodos claramente trazados. La Organización de las Naciones Unidas plantea cuatro condiciones para el correcto funcionamiento de estos programas:

1. La respuesta al delito debe reparar tanto como sea posible el daño sufrido por la víctima.

2. Los (as) infractores (as) deben reconocer sus acciones y deben llegar a entender que su comportamiento no es aceptable y que tuvo consecuencias reales para la víctima y la comunidad.
3. Las víctimas deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades y deben poder tomar decisiones respecto a la reparación de los daños.
4. La comunidad tiene la responsabilidad de contribuir en el proceso.

Como se puede ver en las características anteriormente mencionadas, la participación de las partes es esencial al proceso, pues cada uno de los actores implicados incide en la resolución permanente de los problemas ocasionados. Primero, la intervención de las víctimas en las decisiones permite que los acuerdos establecidos sean acordes a sus necesidades. Segundo, la intervención de los ofensores permite un reconocimiento genuino de la culpa, lo que puede posibilitar la prevención de delitos ulteriores. Y tercero, la participación de la comunidad le da a ésta la posibilidad de incidir en la reparación de una acción de la que también ha resultado ultrajada. Por éstas y otras razones, para que un proceso sea realmente restaurativo, se deben cumplir con unos mínimos requisitos: que la víctima y el ofensor deben ser identificables y que ambos participen de manera voluntaria. Por su parte, la participación de la comunidad en la resolución del conflicto no es obligatoria pero sí deseable.

1.4. Principios de los programas de Justicia Restaurativa

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido unos lineamientos para la implementación programas de Justicia Restaurativa, en un documento denominado: “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal”. Este documento parte del reconocimiento de que a través de dicho principio se le da:

A las víctimas la oportunidad de obtener reparación, sentirse más seguras e intentar cerrar una etapa; permite a los delincuentes comprender mejor las causas y los efectos de su comportamiento y asumir una genuina responsabilidad; y permite a las comunidades comprender las causas profundas de la acción delictiva, promover el bienestar comunitario y prevenir la delincuencia” (Naciones Unidas, 1997, p. 135).

En síntesis, lo que plantea el documento es que: “los programas de justicia restaurativa se pueden utilizar en cualquier etapa del sistema de justicia penal, a reserva de lo dispuesto en la legislación nacional”; también hace hincapié en las condiciones de seguridad y equidad de ambas partes; en la importancia de tener en cuenta las diferencias culturales entre las partes; en el carácter confidencial de las conversaciones mantenidas durante los procesos; en la importancia de la supervisión judicial de estos procesos y en la necesidad de capacitación, idoneidad e imparcialidad de los facilitadores. Por otra parte, plantea la complementariedad de la Justicia Restaurativa con la justicia ordinaria en tres ámbitos:

- a. Cuando los procesos restaurativos no sean un recurso apropiado o posible, pues en estas situaciones, el caso deberá remitirse a la justicia penal.
- b. Los resultados de los acuerdos resultantes de programas de justicia restaurativa, , deberán, cuando proceda, ser supervisados judicialmente y, cuando esto ocurra, tendrán la misma categoría de cualquier otra decisión o sentencia judicial.
- c. El incumplimiento de un acuerdo concertado en el curso de un proceso restaurativo, cuando así lo disponga la legislación nacional, deberá remitirse al proceso de justicia penal ordinario, y deberá adoptarse sin demora una decisión sobre la forma de proceder.

1.5. Actores según la Justicia Restaurativa

Para los teóricos de la Justicia Restaurativa, existen tres actores, que se han mencionado insistentemente en este documento, sin los cuales es imposible llevar a cabo una práctica totalmente restaurativa. Éstos son: las víctimas, los (as) infractores (as) y la comunidad. Según la Declaración de Leuven (1997) una práctica restaurativa es “un proceso en el que todas las partes implicadas en un determinado delito resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias de ese delito y sus implicaciones para el futuro”. Para otros, sin embargo, la intervención de la comunidad en estos procesos puede ser prescindible. Éste es el caso de la legislación penal colombiana, la cual define a la justicia restaurativa como “todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente en forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador” (Ley 906 de 2004, Artículo 518).

1.5.1. Víctimas del delito

Una de las características primordiales de la justicia restaurativa es su especial interés por aquellas necesidades de las víctimas, las cuales no siempre tienen una centralidad en los sistemas de justicia penal. Es frecuente, afirma Howard Zehr (2010), “que las víctimas se sientan ignoradas, abandonadas e, incluso, hasta atropelladas por los procesos judiciales” (p. 19). Para este autor, el delito, al ser definido como un perjuicio contra el Estado, deja por fuera a las víctimas, quienes terminan siendo eclipsadas por los interlocutores de dicho Estado y con esto, terminan siendo acalladas las necesidades específicas que las víctimas desearían satisfacer por intermedio de la justicia.

Al respecto, el Manual sobre programas de Justicia Restaurativa, de Naciones Unidas, ha esbozado una serie de premisas para el tratamiento de las víctimas en los procesos de Justicia Restaurativa, resaltando la importancia de “proteger los intereses de la víctima y asegurarse que no exista una doble victimización” (2006, p. 59).

Dentro de estas premisas, el documento plantea las siguientes:

- a. La necesidad de un trabajo preparatorio con la víctima, antes de un encuentro con su ofensor (a).
- b. Tener el consentimiento libre y voluntario de la víctima, con la posibilidad de ser retirado y de abandonar el proceso en cualquier momento.
- c. Contemplar la posibilidad de que haya una “víctima sustituta”, es decir, una persona cercana o familiar, que actúe en representación de la víctima.

- d. Por último, con respecto a los casos que involucran víctimas infantiles, el manual plantea que se debe tener especial cuidado de protegerlos, asegurarse de que su consentimiento sea verdaderamente voluntario y de que es consciente de que puede retirarse del proceso en cualquier momento.

Para Howard Zehr, la justicia restaurativa busca la reparación de los daños ocasionados a las víctimas a través también de la centralidad de éstas últimas en los procesos. Esto, afirma el autor, permite que haya una reparación simbólica, a través de la subsanación de cuatro de sus necesidades.

La necesidad de Información: Según la cual, las víctimas necesitan acceder a información real y de primera mano sobre las circunstancias de los hechos y las razones por las cuales éstos se dieron.

Narrar los hechos: Como afirma Zehr, “un elemento importante en el proceso de recuperación después de un crimen, es tener la posibilidad de relatar la historia de lo que sucedió”. Según este autor, parte del trauma causado por el crimen se debe a que éste ha trastornado “el concepto que tenemos de nosotros mismos y de nuestro mundo, así como nuestra historia de vida” (Zehr, 2010, p. 20).

Control: Otra de las necesidades de las víctimas, contempladas por Howard Zehr, es sentir que retorna a ellas el control de sus vidas, arrebatado por los ofensores, en forma de propiedades o de violencia física y/o simbólica. Es por ellos que la “oportunidad de involucrarse en su propio caso en el transcurso del proceso judicial puede ser un aporte importante para que las víctimas recuperen un sentido de control” (Zehr, 2010, p. 20).

Restitución o reivindicación: Por último, pero no menos importante, es la necesidad de reparación. Cuando el ofensor hace un esfuerzo para reparar el daño causado, aunque sea de manera parcial, en cierto modo está diciendo: “Reconozco que yo soy responsable y que tú no tienes la culpa” (Zehr, 2010, p. 20)

Como afirma Diana Britto, “con la justicia restaurativa se busca introducir un nuevo espíritu a la justicia, recrearla desde la perspectiva de las víctimas como protagonistas para que junto con el infractor y con el apoyo de la comunidad, se busque la reparación de los daños y la restauración de las relaciones de ambos con la sociedad” (Britto, 2010, p. 19). Este nuevo espíritu representa un desafío para la sociedad, en la medida en que la insta a involucrarse en los conflictos que suceden en su interior pues debe entender que “el delito y los conflictos suceden en el contexto social, y que por ende sus consecuencias y claves para la búsqueda de resolución están en la comunidad misma” (Britto, 2010, p. 19).

1.5.2. La comunidad

La justicia restaurativa asume que la presencia de la comunidad es esencial para la resolución del conflicto entre el delincuente y la víctima, “por cuanto hace sensible al infractor sobre el dolor ocasionado y los alcances de sus actos” (Britto, 2010, p. 20). Ante tal sensibilización, dirá la autora, “es muy probable que no reincida en los hechos, y que además restablezca los vínculos con la comunidad” (Britto, 2010, p. 20), pues el infractor se hace consciente de que su acto delictivo lo ubica en un lugar marginal de esta misma. “En ese sentido la justicia restaurativa condena el acto delictivo (...) alienta el arrepentimiento del delincuente para que trabaje activamente en la reparación del daño causado para que pueda así lograr recuperar su lugar en la sociedad” (Britto, 2010, p. 20).

Según el ICBF, “la justicia restaurativa es un modelo de justicia comunitaria que pone todo su énfasis en la dimensión social de los delitos y los conflictos” (ICBF, 2017, p. 70). Algunos promotores de la justicia restaurativa “afirman que cuando el estado actúa a nombre nuestro, debilita nuestro sentido de comunidad”. Las comunidades, subraya Zehr (2010), “sufren el impacto del crimen y, en muchos casos, deberían ser consideradas como partes interesadas en su calidad de víctimas secundarias” (p. 23). Es más, cuando los miembros sienten el impacto, directo o indirecto, de un delito, sufren una afectación que les debería conceder la responsabilidad y el beneficio de incidir en la restauración. No solo por ellos, si no también en nombre de las víctimas, los ofensores y su propia comunidad.

1.5.2. Los Ofensores

Sobre los ofensores (as) es importante hacer una claridad. Pese a que en la mayoría de los sistemas de justicia, éstos son tenidos en cuenta, las razones varían dependiendo de la dimensión ética de estos sistemas. En el marco de la justicia restaurativa, el interés de responsabilizar a los ofensores no es necesariamente asegurarse de que éstos reciban el castigo que merecen. Como se ha mencionado anteriormente, la importancia de que los ofensores participen de un proceso restaurativo reside sobre todo en que sobre ellos recae la responsabilidad de subsanar al menos dos de las necesidades de las víctimas: la de información y la restitución). Contrario a los procesos enmarcados en la justicia ordinaria, en donde hay muy poco que motive a los ofensores a comprender las consecuencias de sus acciones y a empatizar con las víctimas, en los procesos de justicia restaurativa, los ofensores son motivados a asumir la responsabilidad de sus acciones y son obligados a realizar acciones concretas que sean coherentes con esta responsabilidad. Por otra parte, este gran marco ético que significa la Justicia Restaurativa concibe dimensiones que la

Justicia Retributiva no. Por ejemplo, los motivos que tienen los ofensores para causar daño a sus víctimas; motivos que, desafortunadamente, los procesos de justicia penal y/o la experiencia en prisión tan sólo exacerban.

Como se ha mencionado tangencialmente en páginas anteriores, uno de los objetivos de la Justicia restaurativas (con sus prácticas y programas adyacentes) es lograr cambios más permanentes de los que la justicia retributiva ha demostrado lograr. Uno de estos cambios es, por su puesto, la prevención de delitos ulteriores. Éste es el tema que se aborda a continuación.

1.6. La prevención del delito

Una de las bases éticas de la justicia restaurativa es la comprensión de que el delito no se da como caso aislado, sino que responde a unas condiciones específicas de cada grupo social. Es por ello que para hablar de restauración se tiene que hablar también sobre prevención, pues la restauración no es efectiva si no se tratan esas condiciones que catalizan los delitos.

Es aquí en donde el tema de la Justicia Restaurativa supera los lineamientos pragmáticos, relacionados con las prácticas, los programas y las premisas, y entra a interpelar las estructuras sociales en todos sus niveles.

Esto tiene una razón fundamental y es que, al ser la Justicia Restaurativa una idea heredada de grupos sociales pequeños, con mucho más en común que el ser parte de un Estado (no es gratuito que se les llame comunidades), sus ideales de justicia, y los medios

para alcanzarla, están más cerca de lo consuetudinario, que del castigo y es justo en este punto en donde reside un de los problemas más grandes de la extrapolación de la JR a las sociedades contemporáneas. Planteándolo de otro modo la pregunta sería ¿hasta qué punto es posible lograr una Justicia Restaurativa -es decir, un estado de las cosas en el que realmente los lazos quebrantados se vuelvan a cerrar- si no existen cambios estructurales que promuevan la -por así decirlo- convivencia pacífica?

Es aquí en donde es importante traer a colación un instrumento internacional que da los lineamientos a los Estados para prevenir la delincuencia juvenil y que es de enorme trascendencia para este documento pues aborda la población central del SRPA y puede dar respuestas a la pregunta anteriormente planteada.

El instrumento mencionado es: las Directrices de la RIAD, las cuales parten de la premisa de que “la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad” (Regla 1) y plantea que “si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas” (Directrices de la RIAD, Regla 1). Por esta razón, dicen las directrices, toda la sociedad debe procurar “un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respetar y cultivar su personalidad a partir de la primera infancia” (Regla 2).

Según este instrumento, es crucial que el diseño de políticas tienda a la prevención de la delincuencia y (Regla 5): se cree oportunidades (con especial énfasis en niños en situación de riesgo social); se cree un entorno (leyes, instituciones, red de servicios) “cuya

finalidad sea reducir los motivos, necesidad y oportunidades de comisión de las infracciones”; y que, cuando sea necesaria la intervención oficial, ésta sea justa y equitativa.

Como afirman estas directrices: es primero la comunidad quien debe procurar evitar la delincuencia juvenil. Solo en última instancia debe recurrirse a organismos oficiales (Regla 6). Y los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de todos los jóvenes (Regla 52). Las condiciones esenciales de estas leyes son:

Prohibir la victimización, los malos tratos y la explotación de los niños y jóvenes, así como su utilización para actividades delictivas (Regla 53); limitar y controlar el acceso de los niños y jóvenes a las armas de cualquier tipo (Regla 55); garantizar que ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un joven (Regla 56). Además, ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección o castigo severos o degradantes en el hogar, en la escuela ni en ninguna otra institución (Regla 54).

Estas reglas también establecen que debe establecerse un puesto mediador para los jóvenes que garantice la condición particular de estos (Regla 57). Y que se capacite personal de ambos sexos encargado de hacer cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese personal deberá estar al corriente de los programas y posibilidades de remisión a otros servicios, y recurrir a

ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes al sistema de justicia penal (Regla 58).

1.7. Apuntes finales sobre la justicia restaurativa:

A modo de conclusión, se puede afirmar que la justicia Restaurativa puede ser definida simplemente como una forma más humanizada de hacer justicia, enfatizando en la mediación y negociación de los conflictos entre las personas. Como se pudo observar a lo largo de este capítulo, la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto una serie de métodos para que los Estado incorporen este nuevo modelo de justicia, a través de sus manuales para programas de justicia restaurativa y su lista de principios. Podemos afirmar de estos lineamientos que los programas y prácticas de carácter restaurativo deben tener algo en común y es entender que la restauración del daño es un proceso que se da siempre y cuando: i) Se haga todo lo posible por reparar los daños causados, tanto de manera material como simbólica, ii) Los ofensores sean conscientes de las consecuencias de sus acciones y, subsecuentemente, se hagan responsables de éstas y iii) Todas las partes afectadas – víctimas, ofensores y la comunidad- se comprometan a ser partícipes del proceso.

Se puede afirmar también que la JR es un ideal que piensa más en el futuro que en el pasado, por lo tanto propone que sus resultados tengan cierto nivel de permanencia en el tiempo Para esto es necesario que los Estados hagan importantes esfuerzos por prevenir la delincuencia, lo que nos devuelve al concepto de corresponsabilidad, el cual es uno de los enfoques del SRPA, el cual trataremos en el capítulo a continuación.

CAPITULO II – APLICACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN COLOMBIA

Este capítulo se refiere a la aplicación de la justicia restaurativa en el Sistema de Responsabilidad de Adolescentes, contemplado en el segundo libro del Código de Infancia y Adolescencia, en donde se establece un conjunto de principios, normas y procedimientos dirigidos a una parte muy importante de la población que son las personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años de edad hayan cometido una conducta punibles. Para revisar esta aplicación veremos qué entiende esta ley por Justicia Restaurativa, por enfoque restaurativo y cómo pone en juego estos conceptos a través de sus principales actores. Por último veremos cómo define este sistema, a través de sus lineamientos a las víctimas y a los (las) ofensores (as).

2. 1. El Código de Infancia y Adolescencia

La ley 1098 de 2006, o Código de Infancia y Adolescencia “tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 2), así como “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 1) en condiciones de igualdad y dignidad.

Uno de los instrumentos internacionales que más incidió en la formulación de esta ley fue la Convención Internacional de los Derechos de los niños y las niñas, pues al haber sido ratificada por el Estado colombiano en el año 1990, éste asumió la obligación de aplicarla. La aplicación es el proceso a través del cual “los Estados Partes toman medidas para garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos en la Convención a todos los niños situados dentro de su jurisdicción” (Comité de los Derechos del Niño, 2014, p. 55). Esto es precisamente lo que obligó al Estado Colombiano a actualizar los preceptos legales referentes a los niños y niñas -contenidos principalmente en el Decreto Ley 2737 de 1989-, de acuerdo a los cambios, sociales, culturales, judiciales, de reconocimiento y protección integral de la infancia y la adolescencia, pues los postulados establecidos en dicha normatividad no eran acordes con los instrumentos internacionales y los principios de dignidad y de interés superior.

El Código de Infancia y Adolescencia (en adelante CIA) derogó al Código del Menor Decreto 2737 de 1989, que determinaba que las personas menores de dieciocho años que cometieran delitos se encontraban en una situación irregular y debían recibir tutela y protección del Estado. Por el contrario, el CIA establece que un (a) adolescente es un sujeto de deberes y derechos, y por tanto debe ser tratado como tal; así mismo establece que éste (ésta) debe responder por los daños ocasionados través de las medidas de reparación a las víctimas. Como se afirmó anteriormente, el segundo libro del CIA corresponde Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y establece los procedimientos especiales cuando los niños, las niñas o los adolescentes han cometido una conducta punible. Esta nueva legislación es de carácter integral, y no tutelar. Lo que significa que, en consonancia con lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), dicha legislación debe

contener, “tanto regulaciones de protección y garantía de derechos como normas sobre responsabilidad penal” (Simon, 2009, p.3, citado en CONPES, 2009, P. 14).

2.2. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

El SRPA, conforme se define en la ley 1098 de 2006, es “el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible” (Congreso de Colombia, 2006). Este sistema es también el producto de una transición en la manera de comprender la delincuencia juvenil, pues, en oposición al modelo tutelar, aquí se considera a los y las adolescentes “como sujetos de derechos, aun cuando estén “en conflicto con la ley” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015, p.81)¹.

El SRPA se basa en la idea de que, si bien es cierto que los adolescentes que delinquen son responsables de sus actos, también lo es que en su actuar “hay condiciones muy particulares que ameritan la existencia de un modelo autónomo en donde se proteja y mantenga incólume su superior interés” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015, p.91). Es por esta razón que este sistema aboga por un derecho penal de mínima intervención que dé “cabida a otras formas de tratamiento que resulten pedagógicas, específicas y diferenciadas de los adultos” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015 p.92), cuyo objetivo primordial debe ser, antes que el castigo, la búsqueda de la justicia restaurativa, la verdad y la reparación a las víctimas. En otros términos, reconoce a las víctimas como el

---

¹ Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, hacia la Protección Integral y la Justicia Restaurativa, 2015

eje del proceso, pues, a través de la reparación del daño que se les ha ocasionado, busca restaurarlas a ellas y a los tejidos que han sido quebrantados en la sociedad por causa del ilícito. Por otro lado, está el adolescente, que si bien debe ser sancionado, su sanción deberá tener un carácter pedagógico.

2.2.1. Justicia restaurativa en el SRPA

Una de las características más importantes del SRPA es la inclusión del concepto de justicia restaurativa, “no solo en cuanto a los fines y objetivos de las sanciones, sino también en cuanto a la relación entre la víctima y el victimario y los mecanismos para su aplicación” (Coord. Maldonado, 2015, p.33). La Justicia Restaurativa constituye el marco teórico dentro del cual se articula el SRPA; sus características responden a la idea de que la administración de justicia, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, debe tener un carácter restaurativo.

Como se pudo ver en el primer capítulo, el carácter restaurativo de las acciones no las dan las acciones en sí mismas, sino el contexto y la intención con las que éstas se realicen. En este caso, el Ministerio de Justicia (2015) propone que, para que las sanciones sean restaurativas deben: generar conciencia en el adolescente frente a su comportamiento para con la sociedad y protegerlo de “las circunstancias sociales que favorecen la aparición de estas conductas disruptivas y socialmente reprochables” (p. 154). Estos fines, continúa el documento, “solo se cumplen en la medida en que, además del Estado, sea la sociedad y la familia quienes se comprometan con este importante propósito y desplieguen todos los recursos que estén a su alcance para combatir la problemática” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015, p.154). La justicia restaurativa, entonces, le proporciona un giro a la justicia

penal, al enfocarse en la reparación de los daños causados y de las relaciones, generando un proceso mediante el cual se crean mecanismos de reparación logrando la participación de la víctima, el victimario, la familia y la sociedad.

2.2.2. Enfoque restaurativo en el SRPA

El “Lineamiento modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley” (2017), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es uno de los documentos esenciales para comprender cómo funciona el SRPA en la praxis. Este documento ha sido construido con tres enfoques: el poblacional, el diferencial y el restaurativo. De los cuales es de nuestro particular interés el último; el cual consiste, según el ICBF, en ver la conducta punible desde, principalmente, dos perspectivas: la circunstancias en las que sucedieron los hechos, y las características individuales del o la adolescente, haciendo énfasis “en la reparación del daño causado y la restauración de los vínculos sociales” (ICBF, 2017 p.65). Desde este enfoque, el delito no es lo que define al adolescente o joven, sino la capacidad que tiene éste para hacerse responsable de sus acciones (...), asumiendo voluntariamente acciones restaurativas, construidas con su entorno y que le facilitan una mejor interacción y convivencia” (ICBF, 2017 p.66). Es por esta razón que “las medidas aplicadas por los jueces como respuesta legal de los delitos cometidos por los adolescentes o jóvenes deben tener una intención formativa que contribuya a su desarrollo como ser humano integral”, fomentando a través de éstas la reflexión y “promoviendo la dignidad de todos los actores: infractor y víctima” (ICBF, 2017 p.68). Esto concuerda con el artículo 178 de la ley 1098, según el cual “la finalidad de las sanciones impuestas a los adolescentes en el SRPA, es protectora, educativa y

restaurativa y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas” (Congreso de Colombia, 2006, art. 178).

Más adelante, este mismo documento dedica un acápite a hablar sobre la justicia restaurativa, retomando la definición que hace Diana Britto de este concepto:

La justicia restaurativa es un modelo de justicia comunitaria que pone todo su énfasis en la dimensión social de los delitos y los conflictos. Busca restaurar el lazo social dañado, a través de un proceso de reparación y reconciliación entre la víctima y el ofensor con mediación de la comunidad. En un sentido radical, la justicia restaurativa procura modificar las relaciones desiguales e injustas que han dado lugar a los conflictos (Britto, 2006, p 91-103, en ICBF, 2017, p. 70).

Posteriormente se plantea la pregunta: ¿cómo hacer Justicia Restaurativa?, a la cual responde con dos opciones:

La primera es acogiéndose al sistema judicial² que indica que “son mecanismos de justicia restaurativa la conciliación pre-procesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación”. Estos mecanismos, continúa el documento, “necesitan de la participación de las autoridades administrativas y judiciales además de otros agentes” (ICBF, 2017, p. 71). Para entender mejor este planteamiento, se esbozarán rápidamente

---

² En el marco de las disposiciones de la Ley 1098 de 2006 y la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, que en el libro VI se ocupa de la Justicia Restaurativa

estos tres mecanismos para la implementación de la Justicia Restaurativa, contemplados por el Código de Procedimiento Penal:

2.2.2.1. Mediación:

Es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado (...) trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten su puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta. La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; presentación de servicios a la comunidad; o peento de disculpas o perdón”. (CPP, Art. 523).

2.2.2.2. Conciliación:

Es una estrategia de solución de conflictos que, entendida como medio alternativo al proceso judicial y gracias a la intervención de un conciliador, permite que las partes consideren sus necesidades, intereses, y todo aquello que es verdaderamente relevante del problema, para fomentar y favorecer una solución justa por encima de los hechos manifiestos (...). Así, pues, la conciliación es aquel mecanismo mediante el cual las partes envueltas en un conflicto, previa actuación de un conciliador, buscan una solución racional, lógica y satisfactoria que ponga fin a la controversia”. (FGN, p. 202).

La segunda opción es desde la implementación de Prácticas Restaurativas, las cuales se pueden desarrollar con los adolescentes y jóvenes del SRPA que están en modalidades de atención privativas y no privativas de la libertad, con o sin la participación de autoridades judiciales y administrativas. “Estas prácticas requieren de unas orientaciones que permitan generar procesos de intercambio, diálogo, construcción social y reparación, en el cual se debe promover la participación activa de la familia” (ICBF, 2017, p. 72).

Pese a que en el Lineamiento no se esbozan explícitamente las prácticas restaurativas, sí se hacen dos afirmaciones que ayudan a comprender cómo entiende el ICBF este concepto. La primera es que estas acciones (dentro de los cuales incluye círculos, conferencias familiares y reuniones) hacen parte de un proceso y deben estar acompañadas por autoridades administrativas y judiciales; y, la segunda, es que estas prácticas deben fomentar en los implicados su agencia; es decir su capacidad para producir cambios, mostrar sus potencialidades y trabajar con –no en contra o para- la justicia (ICBF, 2017).

Por su parte, el documento “Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, del Ministerio de Justicia y del Derecho, propone un modelo denominado Modelo 4D que, como lo define su autora, está entre lo restaurativo y lo sancionador y se compone de cuatro ejes: La despenalización, desinstitucionalización, debido proceso y desjudicialización.

Tres de estos cuatro conceptos pueden ser útiles para trazar un camino hacia la Justicia Restaurativa pues todos buscan una reinterpretación del modelo de justicia actual, invitando a la reducción de la intervención de la justicia penal cuando se trata de niños niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Esta propuesta incluye: la reducción de la lista de delitos que pueden de ser cometidos por adolescentes, para el caso de la

despenalización; el empleo de medidas o sanciones alternativas a la privación de libertad, como la libertad vigilada, mecanismos de reparación a las víctimas o la prestación de servicios a la comunidad, para el caso de la desinstitucionalización; y el uso de “estrategias para la terminación anticipada de los procesos penales en curso” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2015, p. 136), para el caso de la desjudicialización.

Por su parte, el derecho al debido proceso y a las garantías procesales, se entiende como el derecho de los y las adolescentes que cometan delitos a la presunción de inocencia, a ser notificados (as) de las imputaciones, a la defensa y la contradicción; así mismo, el derecho al asesoramiento, a la presencia de los padres o tutores, a guardar silencio, y a la confrontación con testigos (el cual incluye el derecho a interrogarlos), entre otros consagrados en Constitución, la ley y los tratados internacionales (Congreso de Colombia, 2006, Art. 151).

Dentro de las finalidades de estas estrategias están: propiciar la solución pacífica y negociada de los conflictos, reducir el campo de acción de la justicia penal de adolescentes, aplicar el principio de oportunidad cuando sea posible y responder a la delincuencia juvenil de manera no represiva, entre otras (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, p. 136).

Además de los elementos ponderados por el modelo 4D, uno de los recursos contemplados por la Ley 1098 más acordes con la Justicia restaurativa es el Principio de Oportunidad, el cual supone el consentimiento de las partes, con el objetivo de que haya “una toma de consciencia de la acción delictiva y las acciones que de ella se derivan (CONPES, 2009, p. 15). Este principio concuerda con la intención de esta ley, de promover

“salidas anticipadas para resolver los conflictos generados por la conducta punible del adolescente” (CONPES, 2009, p. 15).

2.3. Actores del SRPA

Como se establece en el CONPES 3629 de 2009, la Justicia Restaurativa “implica un cambio cultural en el sistema judicial y demás entidades involucradas en su implementación y operación. Así mismo, demanda una oferta de servicios, escenarios y espacios para cumplir con su finalidad” (CONPES, 2009, p. 28). Es por esta razón que los actores del SRPA tienen una gran responsabilidad a la hora de cumplir con los objetivos pedagógicos y restaurativos de este Sistema. En el acápite a continuación se esbozarán las funciones y características de las siguientes entidades y sus equipos de trabajo: la Policía Nacional, El Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, las Defensorías de Familia, las Comisarías de Familia y el ICBF.

2.3.1. Policía Nacional:

La policía Nacional, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, es la encargada de realizar capturas, de garantizar que los y las adolescentes comparezcan a los estrados judiciales; es decir, cumplen funciones de policía judicial. También es la encargada de garantizar el respeto a los adolescentes en los procedimientos policiales y de vigilar y controlar los centros de privación de libertad y los lugares donde permanecen los adolescentes durante las primeras 36 horas posteriores a la aprehensión, con el fin de evitar la evasión de los mismos (Chaparro y Jiménez, 2018, ICBF y OIM, 2013)

Para cumplir con sus funciones de manera concordante con los preceptos del SRPA, la Policía Nacional debe capacitar a la Policía de Infancia y Adolescencia en formación de Policía Judicial, con el objeto de que estos asesoren y apoyen a las autoridades cuando los niños, las niñas y los adolescentes se encuentren incurso en algún hecho delictivo (Congreso de Colombia, 2006, Art. 90).

La ley 1098 ha estipulado también que el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia debe tener estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales, tener formación y capacitación en Derechos Humanos y legislación de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes (Congreso de Colombia, 2006, Art. 92).

2.3.2. Consejo Superior de la Judicatura

De esta entidad, los principales actores son los jueces de Control de Garantías y los Jueces Penales.

Los jueces de Control de Garantías son los encargados de revisar la legalidad de las actuaciones de la fiscalía y de la policía judicial, a fin de verificar el respeto de los derechos de los y las adolescentes, en especial del debido proceso. Sus funciones son: intervenir durante la indagación y la investigación; valorar la legalidad y legitimidad de la actuación de la Policía de Infancia y Adolescencia y establecer la pertenencia étnica de las partes, para proveer traductores de ser necesario.

Los Jueces penales con funciones de conocimiento dirigen el proceso, desde la formulación de la acusación hasta la toma la decisión respecto a la responsabilidad penal del o la adolescente y tomar decisiones sobre las medidas que deberán adoptarse (Camacho y Jiménez, 2018). En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes el Consejo de la Judicatura dispondrá que los Jueces Promiscuos de Familia cumplan las funciones definidas para los jueces penales para adolescentes. Y, a falta de los dos último, será el juez municipal quien conozca de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes (Congreso de Colombia, 2006, Art. 166).

Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales son quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.

Sus funciones van desde: Conocer la formulación de la acusación que hace el Fiscal; imponer la sanción al adolescente declarado responsable penalmente por la comisión de un delito; controlar la ejecución de la sanción; e informar al adolescente y a su familia sobre su situación procesal y sus derechos en el caso de la privación de la libertad (ICBF y OIM, 2013b). También son ellos quienes deciden o no aceptar la solicitud de preclusión de la investigación.

2.3.3. Defensoría Del Pueblo

Los Defensores Públicos son quienes asumen “la defensa técnica del proceso, cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 163). Para hacerlo, deben conocer al adolescente, su situación familiar y los hechos relacionados con el delito. Su función es demostrar su inocencia o propender por una

sanción acorde con el delito que cometió. Además, son los encargados de interponer los recursos legales cuando hubiere lugar y de formular propuestas de aplicación de justicia restaurativa (ICBF y OIM, 2013b).

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo, como institución, está a cargo de realizar un curso pedagógico sobre derechos de la niñez dirigido a padres, madres y personas a cargo del cuidado de los niños y niñas (Ley 1098, 2006, art. 54, en Camacho y Jiménez) como medida de restablecimiento de derechos.

2.3.4. Procuraduría General de la Nación - Ministerio Público

Como parte del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación actúa en el proceso judicial como representante de la sociedad a fin de defender los intereses de todas las personas involucradas en el proceso (Camacho y Jiménez). Para hacerlo, la Procuraduría participa en los procesos judiciales en defensa de los derechos de todos los afectados y puede, de ser procedente, impugnar las decisiones que se adopten

Por otra parte, la ejecución del curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana, que es parte de la sanción de amonestación (Ley 1098/06, art. 182, en Chaparro y Jiménez) está a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público

2.3.5. Defensorías de Familia

Como se establece en el Art. 146, del CIA, “en todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el adolescente deberá estar

acompañado por el Defensor de Familia, quien verificará la garantía de los derechos del adolescente” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 146). Sus funciones son, principalmente:

1. Acompañar al adolescente en todas las actuaciones del proceso, vigilando que se respeten las garantías penales y que las medidas tengan un enfoque protector, pedagógico y restaurativo.

2. Garantizar la verificación de los derechos y activar el proceso administrativo de restablecimiento, en caso de ser necesario.

3. Rendir un informe inicial de la situación familiar, económica, social, psicológica, cultural y del nivel educativo del adolescente ante el Juez de Garantías, con el apoyo del equipo psicosocial y presentar, en audiencia de imposición de sanción, un estudio actualizado, basado en el informe inicial, sobre los resultados de la intervención realizada al adolescente.

4. Controlar que el Operador vincule al adolescente al sistema educativo (ICBF y OIM, 2013).

2.3.6. Comisarías de familia

Las Comisarías de familia son, como lo estipula la Ley 1098, entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar,

restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia (Congreso de Colombia, 2006, Art. 83).

Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. En el marco del SRPA, éstas tienen las siguientes funciones:

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.

2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos.

3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes.

4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar.

2.3.7. Equipo Técnico del ICBF

El ICBF es el encargado de establecer “los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento” (Art. 11). Estos lineamientos deberán definirse en conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia” (Art. 148). Así mismo, las sanciones previstas en el

Artículo 177 de la Ley 1098 de 2006, “se cumplirán en programas de atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (Art. 177). Además de las anteriores, el ICBF tienen funciones en torno a la verificación de los derechos y libertades consagrados del Artículo 17 al 37 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Debe también contactar a los padres del adolescente o a sus representantes legales para que participen activamente en todas las fases del proceso; realizar una entrevista inicial al (la) adolescente y su familia para dar un concepto respecto a las condiciones psicológicas, físicas y nutricionales de éste (a), y sobre su desempeño en los ámbitos familiar y social. Es también este equipo el encargado de elaborar el informe a presentar en las audiencias de garantías y de conocimiento y de hacer seguimiento y acompañamiento al proceso del adolescente a través de sus Defensorías de Familia (quienes hacen seguimiento al cumplimiento de las sanciones (Chaparro y Jiménez, 2018)). Adicionalmente, el ICBF es el encargado de registrar todos estos datos en sus sistemas de información.

Además de sus funciones respecto a los adolescentes, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en coordinación con la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, organizarán los cursos necesarios para capacitar los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia (Congreso de Colombia, 2006, Art. 90). Adicionalmente, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, el ICBF “será el encargado de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 83). Y, a través de su participación en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y los Consejos Departamentales y Municipales

desarrolla políticas públicas con miras garantizar la protección integral de los y las adolescentes.

Por último, es importante subrayar que, en sus lineamientos, el ICBF define a las y los adolescentes y jóvenes como el centro del proceso de atención. Y afirma que son ellos y ellas quienes construyen su subjetividad e identidad, pues “están en capacidad de incorporar, rechazar, dialogar o transgredir aspectos de la socialización que han recibido de quienes constituyen su sistema de vínculos afectivos significativos, sus redes familiares y sociales, e incluso de los actores institucionales” (ICBF 2017, p. 30). Es por esta razón que el ICBF se propone como un intermediario más en los procesos de socialización de los y las adolescentes y no como un ente que controle sus cuerpos o los obligue a acatar las normas.

2.4. Adolescentes que han cometido un ilícito

Por supuesto, además de las instituciones que hacen parte del SRPA, están otros actores, esta vez como beneficiarios y son los adolescentes que hayan “realizado una conducta punible -de las contempladas en el Código Penal, esto es, en la ley 599 de 2000- y cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 14 y los 18 años. Estos adolescentes tienen derecho:

A ser juzgado[s] conforme a las leyes preexistentes, llevar el proceso ante el juez o tribunal competente, desarrollar el proceso con observancia plena de las formas propias de cada juicio, que en cada caso le sea aplicada la ley más favorable, que se presuma inocente hasta que sea declarado jurídicamente responsable, contar con un abogado que lo/la represente y asista en su defensa, que el proceso sea público, sin

dilaciones injustificadas, presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, impugnar la sentencia condenatoria, no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, a ser escuchados en toda actuación administrativa o judicial y que sus opiniones se tengan en cuenta, que el defensor de familia esté presente en todo el proceso y sea escuchado en el juicio, ser internado o remitido únicamente a instituciones para menores de edad, y en ningún caso para mayores (Constitución Política de Colombia).

Sus familias están también incluidas como agentes en el sistema pues en ellas “recae el deber de prevenir las conductas punibles, orientar a los adolescentes en el ejercicio responsable de sus derechos, permitirles asumir su condición de ciudadanos e inculcar el respeto por las normas” (Ministerio de Justicia, 2015). Y tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: acompañar al adolescente en todas las etapas del proceso y “supervisar la conducta del adolescente durante la ejecución de la sanción impuesta por el juez, velando que se cumpla cabal y debidamente” (Art 9, Decreto 860, 2010).

2.5. Las víctimas en el SRPA

Para terminar este capítulo es importante hablar acerca de las víctimas, a las cuales se les dedicará un acápite un poco más amplio pues, por un lado, su configuración jurídica ha pasado por un proceso que merece ser abordado; por otra, el hablar desde un enfoque de justicia restaurativa, supone comprender que un ilícito puede producir múltiples consecuencias para una persona, incluida la revictimización, de no ser tenidos en cuenta ciertos factores que se mencionaron en el capítulo anterior y que traeremos a colación y en

el presente. Y por último, porque existe una diferencia entre víctimas adultas y víctimas menores de edad.

El Código de Procedimiento Penal define a las víctimas como “las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto”, cuya condición “se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la existencia de una relación familiar con este” (Art. 132). Es importante recalcar que en todas las fases del proceso, las víctimas tienen derecho a recibir un trato humano y digno, y a que su intimidad, su seguridad, la de sus familiares y testigos sean protegidas. Tienen derecho a ser oídas en el proceso, a aportar pruebas e información para la protección de sus intereses; tienen derechos a conocer la verdad y que se tengan en cuenta sus intereses; a conocer la decisión relativa a la correspondiente persecución penal y la interposición de recursos; a ser asistidas por un abogado y a recibir la asistencia integral para su recuperación.

Para terminar, con respecto a las víctimas que sean menores de edad, el Código de infancia y adolescencia ha establecido que deben tenerse, entre otros, los siguientes criterios específicos: i) Dar prioridad a sus procesos, ii) citar a los padres, representantes legales, cuando no sean estos los agresores, para que lo asistan en la reclamación de sus derechos iii) informar “a la Defensoría de Familia, a fin de que se tomen las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento pertinentes, en los casos en que el niño, niña o adolescente víctima carezca definitiva o temporalmente de padres, representante legal, o estos sean vinculados como autores o partícipes del delito”. iv) tener

especial cuidado, para que en los procesos que terminan por conciliación, desistimiento o indemnización integral, no se vulneren los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas del delito; v) poner especial atención en que se respete su derecho a ser oídos; vi) garantizar su seguridad y la de su familia y/o testigos; vii) brindarles información clara sobre sus derechos; viii) asegurarse de que sean acompañados por autoridad especializada o por un psicólogo en caso de que sean testigos y se asegurarse de que estén libre de presiones o intimidaciones.

2.6. La comunidad y el concepto de corresponsabilidad

Para terminar este capítulo, haremos hincapié en un concepto que está estrechamente relacionado con el apartado final del primer capítulo y que fue el de Prevención de la delincuencia juvenil. Este concepto es el de Corresponsabilidad y es definido en la Ley 1098 como: la obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, de “formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos” (Art. 15). En otros términos, la corresponsabilidad “es el conjunto de acciones que adelanta el Estado con la participación de la sociedad y de la familia para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y adolescentes” (Congreso de Colombia, 2006, Art. 201).

A este respecto, el CIA ordena que, en cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, todos los integrantes de la sociedad tienen la obligación y de tomar parte activa en la garantía efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de las siguientes acciones:

i) Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente; ii) responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos; iii) participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia; iv) dar aviso o denunciar por cualquier medio los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen; v) colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley; vi) Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Código de la Infancia y la Adolescencia. Art. 40).

A modo de conclusión, se puede afirmar que, el Código de Infancia y Adolescencia define de manera clara el principio de corresponsabilidad, según el cual las acciones de protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, debe procurarse de manera cooperativa entre el Estado, los adolescentes, la familia y la comunidad, como un medio para lograr una transformación cultural hacia la justicia restaurativa. Este principio obedece a los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos de los niños y las niñas y a otros instrumentos internacionales que promueven la protección integral de la infancia y la adolescencia, modelo que tiene una relación concomitante con el concepto de justicia restaurativa.

Adicionalmente, es importante resaltar que, al implicar la Justicia restaurativa un cambio cultural en la sociedad, ésta demanda cambios estructurales en el sistema judicial y demás entidades involucradas en su implementación y operación, e implica que todas estas entidades trabajen de manera orgánica hacia un mismo fin. Pudo verse en este capítulo

como esas entidades: ICBF, Defensoría del Pueblo, CONPES, Policía Nacional, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, han establecido, al menos en teoría, todo un andamiaje para que el SRPA y su finalidad pedagógica y restaurativa, sea posible. En el próximo capítulo revisaremos una serie de informes, seguimientos y monitoreos, para dar cuenta de hasta qué punto, la afirmación anterior es una realidad.

CAPÍTULO III – RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN EL SRPA

Como pudo verse en los anteriores capítulos, la justicia restaurativa, por el hecho de ser una de las finalidades del SRPA, representa un gran reto para éste y para la sociedad colombiana en general. En el presente capítulo se abordarán estas dificultades y retos, a partir de los hallazgos de distintos diagnósticos y monitoreos realizados por entidades gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación, el ICBF y la Comisión de Evaluación del SRPA.

Primero que todo es importante retomar algunos conceptos abordados con anterioridad en el presente documento. El más relevante de todos es, por supuesto, el de justicia restaurativa, la cual es aquella que busca que sean las víctimas, de la mano del infractor y la comunidad, quienes definan los términos de la reparación de los daños, en aras de la restauración de las relaciones sociales, a partir de la comprensión del delito de manera holística; es decir, reconociendo que el delito es a la vez causa de daños y consecuencia de factores sociales. Lo que busca la Justicia restaurativa es encontrar una solución que evite la prolongación de los problemas que originaron la violencia entre las partes. Esto solo se logra si el ofensor asume la responsabilidad del hecho punible, reflexiona sobre su conducta y sobre las circunstancias que la propiciaron, reinterpreta sus actuaciones a la luz de sus consecuencias (Ministerio de justicia y del derecho y OIM, 2017, p. 50).

Como se verá en adelante, esta definición de la JR parece más sencilla de lo que en realidad es. Primero que todo, porque en las sociedades occidentales ha prevalecido un

modelo de justicia retributiva en el marco del cual la sanción es lo que define el grado de justicia logrado (a mayor daño, mayor castigo) y este modelo, que no solo opera en un nivel práctico, sino ideológico, es difícil de derrumbar. Es por esta razón que el principal énfasis de la JR debe ser la comprensión del delito como parte de un ecosistema en el que hay unos factores que promueven la comisión de delitos y unas víctimas cuya reparación es perentoria.

3. 1. Ventajas y retos de la superación de la concepción del castigo como consecuencia de la infracción

James Gilligan (1996) ha propuesto que “toda violencia es un esfuerzo por alcanzar justicia o deshacer una injusticia” (citado en Zehr, 2010, p. 38). Una gran parte de los ofensores se sienten también víctimas de sus propias condiciones. Esto se refuerza en los sistemas de justicia ordinaria puesto que, por un lado, durante las audiencias, los ofensores concentran todos sus esfuerzos en desmarcarse de la culpa y, a la par de que no hay una centralidad del discurso de la víctima, esto hace que muy pocas veces lleguen a comprender realmente el daño causado. Por otro lado, como afirma el criminólogo australiano John Braithwaite (1989) “el depender del castigo como un regulador social es problemático ya que esto avergüenza y estigmatiza a las personas que cometen actos indebidos” (citado en Watchel, 2013, p. 4). Además, esto genera que, al recibir un castigo, los ofensores se sientan re-victimizados, lo que termina en una tautología del rencor y la desadaptación social.

Por su parte, el SRPA parece no haber podido superar del todo la dicotomía delito-sanción. En su Informe sobre violaciones a los Derechos Humanos de adolescentes

privados de la libertad (2015), la Defensoría del Pueblo afirma que el SRPA sigue siendo un sistema fundamentalmente punitivo que, a través del encierro, el castigo y la imposición de límites al ejercicio de las libertades básicas de las y los adolescentes, inflige daño directamente en sus cuerpos y su psiquis. Esta forma de operar, subraya el documento, contradice el sentido y los fines del SRPA.

Como se ha mencionado previamente en este documento, una de las finalidades del SRPA es la justicia restaurativa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2015) “ha recomendado explícitamente el uso de la justicia juvenil restaurativa teniendo en cuenta los graves efectos que tienen las medidas de privación de libertad en jóvenes en etapas de desarrollo y crecimiento personal” (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 23); pues la privación de la libertad expone a los y las adolescentes a situaciones significativas de violencia en el interior de estos centros, dado que en muchos de éstos operan organizaciones criminales que pueden aprovecharse de su vulnerabilidad.

Pese a que más adelante se abordará específicamente el hecho de que no existe una delimitación de delitos a los cuales es aplicable la Justicia restaurativa, es importante subrayar en este punto que el Manual sobre Programas de Justicia restaurativa (2006) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, propone dentro de sus objetivos que “un proceso de justicia restaurativa no necesariamente descarta todas las formas de castigo (por ejemplo multas, encarcelamiento, libertad condicional)” (p. 11), mientras éstas se enfoquen principalmente en producir resultados restaurativos y directos. En relación a esto, el Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM (2017) sugieren que hay

opiniones encontradas respecto a la posible complementariedad entre la retribución y la restauración. Por una parte hay quienes piensan que la restauración requiere de una retribución (Duff, 2003) y hay quienes sugieren (como Young & Hoyle, 2003; Walgrave, 2002) que la segunda es contraproducente para la primera (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 32).

Esta discusión, por supuesto permea también el SRPA. Mientras que el ICBF y OIM (2012), afirman que lo más importante es que las sanciones (las seis de las que dispone el sistema) tengan un carácter pedagógico por medio del cual se logre que infractores, víctimas y comunidad comprendan “que los derechos de cada uno llegan hasta el momento en que se afectan los derechos del otro, que todo acto tiene consecuencias y, por tanto, se deben asumir las responsabilidades en la materia” (p. 10), el Comité de los Derechos del Niño opina al respecto que los Estados Partes tienen la obligación de proponer “medidas en relación con los niños que tienen conflictos con la justicia que no supongan el recurso a procedimientos judiciales” (Observación General N 10, 2007, par 24).

Más allá de lo que la teoría respectiva a la Justicia restaurativa sugiere, incluso en términos normativos, la tendencia a la justicia retributiva constituye un obstáculo. En este sentido, el ICBF ha afirmado que la recurrente imposición de la privación de la libertad, por parte de jueces y juezas del país, “refleja todavía una mentalidad más tutelar y punitiva que restaurativa, pese a la existencia de una base jurídica que sustenta esta última” (ICBF, 2012, p. 8, citado en Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM).

La Defensoría del Pueblo tampoco ha sido muy optimista en su lectura del SRPA. En su informe del 2015 observó sobre el particular que, “aunque formalmente se ha señalado que el núcleo de la intervención del SRPA es la justicia restaurativa, en la práctica se evidencia la aplicación de un modelo de justicia retributiva, característico de la aplicación de la justicia penal” (p. 88). Esta institución hace hincapié en seis características del sistema que lo anclan al modelo de justicia retributiva. Así lo resume el informe:

i) no se aplican medidas pedagógicas, sino castigos frente a la responsabilidad del adolescente; ii) se pretende que la amenaza de este castigo sea utilizada como mecanismo para disuadir del crimen a otros adolescentes o para evitar reincidencias; iii) las víctimas no son tomadas en cuenta como sujetos importantes dentro del proceso, ya que de hecho, no son consideradas; iv) la comunidad es mantenida al margen de este proceso y no es mediadora alguna del proceso restaurativo; v) la participación del adolescente se produce a través de un apoderado, y vi) se aísla al adolescente de la comunidad de la que hace parte y en la que se produjo el daño que está llamado a reparar (p. 88).

Estas seis características afectan la implementación de la justicia restaurativa y como se verá en adelante, estas se reiteran en varios de los informes de seguimiento y monitoreo del SRPA.

3. 2. La falta de delimitación de delitos en los cuales es aplicable el principio de justicia restaurativa

Según cifras del Consejo Superior de la Judicatura correspondientes al último trimestre del año 2013, el registro de adolescentes privados de libertad por casos de hurto es el más alto en todos los centros de internación, con más del 50%. El Comité de los Derechos del Niño reitera esta afirmación y sugiere que, de acuerdo con los principios enunciados en el párrafo 1 del artículo 40 de la Convención, es preciso tratar todos esos casos sin recurrir a los procedimientos judiciales de la legislación penal. Para el Comité, esto tiene múltiples ventajas pues: se evita la estigmatización de los niños y niñas que hayan infringido la ley y no se adoptan medidas que puedan dificultar la plena participación del niño o la niña en su comunidad, como por ejemplo el aislamiento social o la publicidad negativa.

Al respecto, la Ley 1098, no hace ninguna delimitación de los delitos a los cuales es aplicable el principio de Justicia restaurativa. Esto, en principio, sugeriría que no importa la gravedad del ilícito, todos podrían ser resueltos a partir de este modelo. No obstante, esto, en términos prácticos, no sucede; lo que contradice no solamente la finalidad del sistema, sino también los objetivos del artículo 174, sobre el principio de oportunidad.

3. 2. 1. Sobre la aplicación del Principio de Oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños

El código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 174 permite la aplicación del principio de oportunidad en los casos en que ello sea procedente, buscando que se generen

acuerdos entre el o la adolescente y las víctimas, bien al inicio del proceso con la renuncia a la persecución penal, con la suspensión a pruebas, o en cualquier momento del mismo (Comisión de Evaluación, 2011). Estos acuerdos deben realizarse con una visión pedagógica y formativa, mediante la cual quienes hayan cometido una ofensa tomen consciencia de las consecuencias de su actuación y de las responsabilidades que ésta conlleva. Respecto a la aplicación de este principio, la Comisión de Evaluación (2011) afirmó que las autoridades judiciales no hacen uso de esta herramienta y prefieren aplicar el proceso penal para adolescentes, obstaculizando de esta manera la intención pedagógica y restaurativa de este principio. Para la Comisión, las autoridades judiciales, en muchos casos, no han superado aún la concepción según la cual es necesario llegar hasta la sentencia para asegurar efectivamente la reparación del daño a la víctima.

Según la Comisión de Evaluación, otros países muestran cómo el 90% de los delitos se resuelven a través de acuerdos entre adolescentes y víctimas, en lugares como centros de mediación o conciliación, donde las autoridades que acompañan el proceso logran acuerdos pedagógicos para el adolescente y reparadores para la víctima. Es importante subrayar también que estos procesos no terminan allí, sino que derivan en un acompañamiento permanente biopsico-social a los y las adolescentes. En Colombia, en cambio, “entre el año 2007 y el mes de junio de 2016, el principio de oportunidad únicamente se aplicó en 650 de los más de 220.000 casos que han ingresado al SRPA” (ICBF, 2016e, citado en Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, p. 55). La sugerencia de la Comisión de Evaluación con respecto a la aplicación exhaustiva del principio de oportunidad es clara al afirmar que, no basta con que haya un lugar y un mediador y se firme un acuerdo, sino de que “el proceso de acompañamiento al adolescente vaya hasta su reinserción social y que el adolescente

cuenta con un centro de referencia al que pueda acudir, incluso diariamente cuando sienta una crisis” (p. 26), o sienta que no pueda alcanzar los objetivos del acuerdo. Este acompañamiento debería involucrar necesariamente a su entorno familiar y comunitario.

Adicionalmente, la Comisión recomienda que los operadores del sistema reciban “un entrenamiento experto que les permita aplicar el principio de oportunidad cuando quiera que la gravedad de la conducta cometida amerite una intervención alternativa para el adolescente, distinta al internamiento institucional” (Comisión de Evaluación, 2011. p. 26).

3. 3. Articulación de actores e instituciones en torno al principio de Justicia restaurativa y problemas operativos en la aplicación de las prácticas restaurativas

La Comisión de Evaluación del SRPA afirmó en el año 2011 que dos de los problemas más graves del SRPA son: “la carencia de programas de capacitación especializada para todas y todos los funcionarios que en el proceso intervienen” y “la bajísima oferta institucional en la que puedan ser cumplidas las sanciones no privativas de libertad en todos los municipios del país” (p. 5). Para la Comisión, las sanciones como reglas de conducta, libertad vigilada y trabajo con la comunidad son esenciales para cumplir con los objetivos de justicia restaurativa, verdad y reparación del daño pero, dada la baja oferta de programas relacionados con estas sanciones en los municipios, los jueces no pueden ordenarlas.

Según el Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, la justicia juvenil restaurativa es un nuevo y alternativo paradigma de atención y supone compromisos de parte de todas las instituciones estatales que intervienen en ella (la policía, los defensores de familia, el

ICBF, los jueces y los fiscales). El proceso pedagógico debe estar asegurado para los adolescentes por todas las autoridades que intervienen, sin embargo, afirma la Comisión de Evaluación del SRPA (2011), que esto no es un elemento que se haya tenido en cuenta, salvo en casos específicos” (p. 13). Para la mencionada Comisión es menester que exista una variedad de guías “sobre lo que debe ser un proceso con carácter pedagógico, especializado y diferenciado que asegure la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño” (p. 26) dirigida a todas las personas que intervienen en el sistema.

Otro de los problemas a los que se enfrenta el SRPA es la sostenibilidad de la participación de la víctima durante el proceso. En el diagnóstico realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la OIM (2017) se resalta que pese a que el ICBF entiende la necesidad de la participación de las víctimas durante todo el proceso, el alcance de esta institución no es suficiente para lograr sus finalidades en este aspecto, pues ésta no puede comunicarse con ellas. En este sentido, propone el mismo documento, sería más idóneo que sea la Fiscalía -quien detenta los principales canales de comunicación con las víctimas- la institución llamada a promover su participación.

Por parte de los jueces y juezas hay también algunas peticiones para poder aplicar la Justicia restaurativa de manera idónea. Una jueza entrevistada en el marco de la investigación del Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM planteó que la aplicación de la JR a los procesos requiere unos esfuerzos particulares que no son tenidos en cuenta en las evaluaciones que se hacen de su quehacer. Así, la jueza entrevista señaló que:

No se puede seguir evaluando a los jueces a partir de puntuaciones que no tienen en cuenta o no valoran los desafíos de inversión de tiempo que implican los procesos adecuados de justicia restaurativa. Mantener los criterios cuantitativos actuales de producción constituiría un obstáculo para la justicia restaurativa (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, p. 59).

Adicional a esto, los Juzgados 1° y 2° Penal del Circuito con Función de conocimiento para adolescentes, han observado que algunas de las condiciones que favorecerían la aplicación de la JR son: i) capacitar a los integrantes del SRPA, ii) elaborar estrategias de comunicación para divulgar dinámicas formales e informales de justicia restaurativa, y iii) fortalecer “la medida pedagógica con mecanismos judiciales y extrajudiciales de responsabilidad, y así reducir la probabilidad de un daño futuro, promoviendo la integración de la comunidad” (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 60).

Por último, otra de las instituciones que se considera desarticulada en alguna medida de la JR es la policía. “Algunos de los policías entrevistados no conferían un rol a la Policía en el desarrollo de la justicia restaurativa. En particular, manifestaron que la aplicación de dicha justicia correspondía a otras entidades dentro del SRPA” (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 61).

La articulación entre instituciones es crucial para la implementación de la justicia juvenil restaurativa. Es por esta razón que se creó el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en el nivel nacional y regional, a través del

Decreto 1885, emitido el 21 de septiembre de 2015. Este sistema coordina, evalúa y articula las instituciones que hacen parte del SRPA, sin embargo, pese a sus esfuerzos aún falta mucho para cumplir el objetivo de articular a cada uno de los actores del sistema en función de la aplicación de la Justicia Restaurativa en éste (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM).

3. 4. Falta de políticas sociales destinadas a la prevención de la delincuencia

Como se ha mencionado reiterativamente en este documento, el delito hace parte de un sistema mayor de condiciones que lo posibilita y lo promueven. Según las Directrices de la Riad, “si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas” (regla 1). Es por esta razón que la elaboración de políticas estatales destinadas a la prevención de la delincuencia es de suma importancia.

Por otra parte, en cuanto se reconoce que los y las adolescentes vinculados al SRPA, desde el punto de vista socio económico, pertenecen a los sectores de mayor vulnerabilidad y pobreza, se advierte también que para que el sistema funcione, debe tener una injerencia positiva en las problemáticas sociales subyacentes a su entorno. En este sentido, la Defensoría del Pueblo afirmó que, el sistema interviene únicamente en los y las adolescentes como objetos de judicialización, “ignorando las problemáticas sociales propias de su entorno” (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 88).

Esta misma institución afirma que, “según cifras de la Policía Nacional, la oferta de políticas públicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes es precaria, lo que da lugar a un

aumento progresivo en el número de casos de adolescentes en conflicto con la ley penal”. Las cifras de ingresos al sistema van en aumento. En el 2015 se registraron 25.962 ingresos al sistema. Menos que en el 2013, que fueron 30.843 casos, pero mucho más que en años anteriores a la promulgación de la ley 1098 (10.631 casos en el 2008) (Defensoría del Pueblo, 2015).

Las entidades que han realizado monitoreo al SRPA coinciden en afirmar la importancia de la prevención de la delincuencia como política de Estado. El Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM resaltan la utilidad de prácticas restaurativas, como las conferencias en escuelas y comunidades que integren a jóvenes, familias y a profesionales de las instituciones educativas y del SRPA, con el objetivo de que se haga un abordaje del delito como un tema que compete a la sociedad en general.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo enfatiza en la necesidad de apoyar a las familias de los niños, niñas y adolescentes “a través de empleos dignos para sus padres, madres y cuidadores, de modo que estos adolescentes, afectados por la pobreza, no se vean impulsados o forzados a ser parte de las redes de delincuencia y crimen que proliferan en todo el país” (Defensoría del Pueblo, 2015, p. 89).

Mejorar las condiciones de los y las adolescentes, no solo previene la delincuencia sino la reincidencia, otro problema que no para de crecer y que impide en gran medida el posicionamiento de la Justicia restaurativa como modelo útil para resolver la violencia social. Este tema, como se vio en el capítulo anterior es una competencia de todas las partes integrantes de la sociedad y tiene que ver con el imperativo de corresponsabilidad,

consagrado en el Código de Infancia y adolescencia (Art. 201), según el cual la sociedad y de la familia deben emprender acciones para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y adolescentes.

3. 5. El problemático concepto de comunidad

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, uno de los problemas más grandes de la definición de la Justicia restaurativa, es el concepto de comunidad sobre el cual esta definición está sustentada. Para Manuel Delgado, una comunidad “corresponde a un tipo de organización social inspirada precisamente en el modelo de los lazos familiares y domésticos, fundamentada (...) en relaciones personales de intimidad y confianza entre quienes comparten vida cotidiana y trabajo” (Delgado, 2007, p. 43).

Así, al ser el modelo de JR un modelo heredado de sociedades pre modernas o comunidades pequeñas, es extremadamente difícil extrapolar muchos de sus postulados a sociedades occidentales que, como afirma Delgado, están fundadas “en relaciones impersonales entre desconocidos, vínculos independientes, relaciones contractuales, sistema de sanciones seculares, desarraigo, anonimato, etc.” (Delgado, 2007, p. 43).

Para los autores del “Diagnostico y lineamientos de política para la aplicación de la justicia juvenil restaurativa en Colombia”, más allá de los postulados académicos, aún no es claro cuál es exactamente el papel que la comunidad debe asumir en la reparación del daño y en la restauración de los vínculos sociales. Es decir, si bien existe el dogma de que la comunidad puede eventualmente cumplir con “funciones de veeduría y control social, de cooperación y soporte mediante la generación de ofertas de inclusión social para los

ofensores”, no es claro aún cómo debe operar esta cooperación. Por otra parte, este mismo documento subraya que “las comunidades no han sido integradas en los procesos de JR y tampoco han sido sensibilizadas con el problema social de la delincuencia juvenil” (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 127). Es por esta razón que estas mismas comunidades son quienes más presión ejercen sobre imponer la sanción de privación de la libertad a los y las adolescentes que han infringido la ley penal e incluso confunden la Justicia restaurativa con la impunidad.

En este sentido, las comunidades, la mayoría de veces romantizadas por el discurso de la JR, son una fuente de tensión. De hecho, generalmente sucede que existe más empatía entre profesionales y el o la adolescente acusado de la comisión de un delito, que entre éste (a) y la comunidad. Esto reduce en gran medida la capacidad de esta última “de generar oportunidades (por ejemplo, de trabajo) y ayudar a evitar actividades que se consideran “criminogénicas” (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 124).

Al respecto, el Ministerio de Justicia y del Derecho propone que se redefina el concepto de comunidad, para que este corresponda con la complejidad de las sociedades actuales y las tensiones que se dan en su interior. Así afirma que

Es necesario superar la perspectiva romántica comunitarista donde prevalecían formas tradicionales de asociacionismo. En efecto, ya no pertenecemos a sociedades pequeñas, homogéneas y estables; por el contrario, estamos en comunidades en constante cambio, dentro de una realidad urbana, con ciudadanos interconectados,

donde la gente interactúa sin tener necesidad de establecer lazos profundos con fines comunes determinados (Ministerio de Justicia y del Derecho y OIM, 2017, p. 159).

A modo de conclusión, se puede afirmar que el proceso de implementación de una justicia restaurativa implica que se presenten muchos desafíos, como asumir la resolución de conflictos desde un enfoque social, con el fin de reintegrar a todas las partes y atendiendo los postulados de la Convención de los Derechos de los Niños, entre ellos la protección integral y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia con los adolescentes.

Desde la perspectiva restaurativa, es indispensable ofrecer a los adolescentes alternativas de resocialización que permitan su reinserción social y la posibilidad de reparar el daño a través diferentes métodos como la mediación, las conferencias familiares, los círculos de sentencia y los paneles de víctimas, con el objetivo de lograr la reintegración del ofensor a la sociedad con ayuda de la comunidad y con la satisfacción de la víctima.

Es indispensable superar la idea de que la justicia se logra por medio del castigo de quien ha delinquido. Este cambio debe darse desde el interior mismo de la sociedad, con la participación del Estado, los medios de comunicación, las políticas públicas y, en general, todas aquellas instancias de la sociedad que detentan el poder de controlar la opinión pública. Hasta que este cambio ideológico no se dé, la JR no podrá sostenerse, ni en el discurso ni en la práctica.

CONCLUSIONES

- La justicia Restaurativa puede ser definida como una forma más humanizada de hacer justicia, enfatizando en la mediación y negociación de los conflictos entre las personas.
- Su aplicación en el SRPA es producto de la aplicación, en el Código de Infancia y adolescencia, de las directrices del Sistema Universal de Derechos Humanos.
- La JR enfatiza en tres puntos fundamentales: la centralidad de la víctimas en los procesos penales, a quienes siempre se ha pasado por alto, reconociendo que es a ellas a quienes se les han vulnerando sus derechos, los que se hace necesario restablecer y fortalecer. La importancia de la participación de la comunidad en dichos procesos, bajo el entendimiento de que ésta también se ve afectada por el delito, al sufrir una ruptura en sus relaciones. Y la búsqueda de mecanismos a través de los cuales los (as) ofensores (as) puedan adquirir consciencia a cerca del daño que causaron, reconocer su responsabilidad e intentar reparar ese daño.
- Las prácticas restaurativas son medios para alcanzar la justicia restaurativa “a través de metodologías y procesos que permiten generar condiciones de dialogo y reparación, dinamizando la responsabilidad en el ofensor y mejorando la convivencia y las relaciones establecidas con las partes que se han visto afectadas por un delito o una falta” (ICBF, 2017, p. 73). Estas metodologías deben buscar, a su vez, que las partes logren acuerdos restauradores, lo que significa que, más allá de la reparación, hayan menos posibilidades de que los o las ofensores (as)

reincidan y que, subsidiariamente, los lazos quebrantados de la comunidad se vuelvan a unir.

- Los programas de justicia restaurativa son acciones sistemáticas que desarrollan los Estados o las comunidades para buscar la justicia restaurativa. Éstas deben cumplir con ciertas condiciones, como lo son: a) que la respuesta al delito repare tanto como sea posible el daño sufrido por la víctima; b) que los (as) infractores (as) reconozcan sus acciones y entiendan que su comportamiento no es aceptable y que tuvo consecuencias reales para la víctima y la comunidad; c) que las víctimas tengan la oportunidad de expresar sus necesidades y puedan tomar decisiones respecto a la reparación de los daños; y d) que la comunidad participe y contribuya en el proceso.
- El Código de Infancia y Adolescencia define de manera clara el principio de corresponsabilidad, según el cual las acciones de protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, debe procurarse de manera cooperativa entre el Estado, los adolescentes, la familia y la comunidad, como un medio para lograr una transformación cultural hacia la justicia restaurativa. Este principio obedece a los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos de los niños y las niñas y a otros instrumentos internacionales que promueven la protección integral de la infancia y la adolescencia, modelo que tiene una relación concomitante con el concepto de justicia restaurativa.
- La Justicia restaurativa implica un cambio cultural en la sociedad, es por esta razón que su aplicación demanda cambios estructurales en el sistema judicial y demás

entidades involucradas en su implementación y operación. E implica que todas estas entidades trabajen de manera orgánica hacia un mismo fin.

- El proceso de implementación de una justicia restaurativa implica muchos desafíos, como asumir la resolución de conflictos desde un enfoque social, con el fin de reintegrar a todas las partes y atendiendo los postulados de la Convención de los Derechos de los Niños, entre ellos la protección integral y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia con los adolescentes.
- Desde la perspectiva restaurativa, es indispensable ofrecer a los adolescentes alternativas de resocialización que permitan su reinserción social y la posibilidad de reparar el daño a través diferentes métodos como la mediación, las conferencias familiares, los círculos de sentencia y los paneles de víctimas, con el objetivo de lograr la reintegración del ofensor a la sociedad con ayuda de la comunidad y con la satisfacción de la víctima.
- Para que la justicia sea reaturativa es indispensable superar la idea de que ésta se logra por medio del castigo de quien ha delinquido. Este cambio debe darse desde el interior mismo de la sociedad, con la participación del Estado, los medios de comunicación, las políticas públicas y, en general, todas aquellas instancias de la sociedad que detentan el poder de controlar la opinión pública. Hasta que este cambio ideológico no se dé, la JR no podrá sostenerse, ni en el discurso ni en la práctica.
- Pese a los esfuerzos del SRPA por acoger el principio de justicia restaurativa en sus acciones, aún falta mucho para que esto se cumpla de manera adecuada. Dentro de

las precisiones que han hecho los diferentes informes de evaluación y seguimiento están: la falta de articulación entre las entidades competentes, la falta de políticas de prevención del delito por parte de los Estados, la etigmatización de la pobreza, la falta de aplicación del principio de oportunidad, entre otras medidas subrayadas como indispensables por los organismos y autores que definen la justicia restaurativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brito, Diana (2010) JUSTICIA RESTAURATIVA: Reflexiones sobre la Experiencia de Colombia, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja.

Chaparro, Liliana y Jimenez, Ana María (2018). “Marco de derechos y SRPA: Apoyando a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en Colombia”. British Council. Bogotá.

CONPES 3629/2009. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA: Política de atención al adolescente en conflicto con la ley.

Comisión de evaluación del sistema de responsabilidad penal adolescente (2011), Informe de la comisión de evaluación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes: artículo 110 de la ley 1453 de 2011. Bogotá.

Comité de Derechos del Niño. Naciones Unidas (2009) Observación general n° 10. El derecho del niño a ser escuchado. Recuperado de <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7532.pdf>

Congreso de Colombia. (8 de noviembre de 2006) Código de la Infancia y la Adolescencia. [Ley 1098 de 2006]. DO: 46.446. Recuperado de https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf

Congreso de Colombia. (22 de enero de 1991). Convención Internacional sobre los Derechos del Niño [Ley 12 de 1991]. DO: 39640. Recuperado de https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Internacional_de_los_Derechos_del_Nino_Colombia.pdf

Defensoría del Pueblo (2015), Violaciones a los Derechos Humanos de adolescentes privados de la libertad: Recomendaciones para enfrentar la crisis del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, Bogotá.

Hadechini, D. (2016). Sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia: algunos vacíos en la aplicación de la medida de libertad asistida, desde la perspectiva de los adolescentes sancionados (Tesis de pregrado). Universidad del Rosario, Bogotá., Colombia. Recuperado de <http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12885>

ICBF (2017). Lineamiento modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley – SRPA. Bogotá.

ICBF y OIM (2012). “La Justicia restaurativa en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia”. Observatorio del Bienestar de la Niñez N° 5. Convenio N° 529/NAJ 661 suscrito entre el ICBF y la OIM. Bogotá.

ICBF y OIM (2013a) Justicia restaurativa, Víctimas y Sociedad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Guía para su comprensión N° 4

ICBF y OIM (2013b). Instituciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: Guía para su comprensión N°5. Bogotá.

Maldonado, G. (2015, marzo, 9) ¿Responsabilidad penal o social? Adolescentes en el Sistema de Responsabilidad Penal (SRPA). Rostros y Rastros, razones para construir ciudad. Recuperado de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/rostros_rastros_9.pdf

Ministerio de justicia y del derecho (2015). Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hacia la protección integral y la justicia restaurativa. Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/sala%20de%20prensa/documentos/Sistema%20de%20Responsabilidad%20Penal%20para%20Adolescentes%20hacia%20la%20protecci%C3%B3n%20integral.pdf>

Ministerio de justicia y del derecho y OIM (2017), Diagnóstico y Lineamientos de Política para la aplicación de la Justicia Juvenil Restaurativa en Colombia. Bogotá.

Naciones Unidas (1997) Declaración de Kadoma sobre el Servicio a la Comunidad y recomendaciones del seminario denominado “Justicia penal: el problema del hacinamiento en las cárceles”, en Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal.

Naciones Unidas, (2006). Manual sobre programas de justicia restaurativa. Naciones Unidas. Nueva York.

Naciones Unidas (2002) “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal”. En Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal. Páginas 134-140. Nueva York

Naciones Unidas (2007), Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)*, en Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal (páginas 78-88).

Procuraduría General de la Nación (2012), Informe de vigilancia superior al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, Bogotá

Leonardo Rodríguez (2012), en el documento denominado “Justicia restaurativa y Responsabilidad penal para adolescentes”,

Uprimny, Rodrigo y Saffón, Maria Paula (2005), Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades

Vargas Prentt, Mariela (2006). Breve estudio de la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia, REVISTA JUSTICIA • UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR • No. 11, 2006.

Watchel, Ted (2013). Definiendo qué es Restaurativo. Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas.

Zehr, Howard (2010). El pequeño libro de la justicia restaurativa. Good books.